



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés

21-070

Proceso: APELACIÓN SENTENCIA
Demandante: **ADRIANA MARIA ARIAS PRISCO**
Demandados: **COLPENSIONES**
Intervinientes: **LUZ STELLA PRISCO RODRÍGUEZ y TERESITA DEL NIÑO JESÚS BOCANUMENTH PUERTA**
Radicado No.: 05001-31-05-001-20116-01160-01
Tema: pensión de sobrevivientes
Decisión: **MODIFICA SENTENCIA**

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia emitida en el proceso de la referencia.

Se reconoce personería al doctor **CARLOS HUGO LEÓN SUÁREZ** identificado con c.c. 79.158.548 y TP 130.125 del C.S. de la J. para que represente los intereses de **COLPENSIONES** conforme sustitución de poder que le hiciera la doctora **MARICEL LONDOÑO RICARDO**, identificada con c.c. 29.105.874 y TP. 191.351 del C. S de la. J en su calidad de Representante Legal de la Sociedad **MUÑOZ Y ESCRUCERIA S.A.S.** quien, a su vez, actúa como Apoderada General de **LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, según E.P. No. 3374 de fecha 2 de septiembre de 2019 de la Notaria 9ª del Circulo Notarial de Bogotá D.C.

El Magistrado de conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 32** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES

1.1. LO PRETENDIDO

Pretende la accionante el reconocimiento y pago de la PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES en un 100% causada por el deceso de su padre MIGUEL ÁNGEL ARIAS HURTADO a partir del 2 de abril de 2005, fecha del fallecimiento, junto con las mesadas adicionales de junio y diciembre, y los intereses moratorios y/o la indexación de las condenas y las costas del proceso.

1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EXPUSO EN SÍNTESIS, LOS SIGUIENTES HECHOS:

- ✓ Que nació el 9 de diciembre de 1990 del matrimonio de los señores MIGUEL ÁNGEL ARIAS HURTADO y LUZ STELLA PRISCO RODRÍGEZ.
- ✓ Que su padre MIGUEL ÁNGEL ARIAS HURTADO falleció el 2 de abril de 2005, data para la cual ella tenía 14 años de edad.
- ✓ Que su padre adelantó proceso ordinario ante el Juzgado 10 Laboral del Circuito de Medellín donde se le reconoció pensión de vejez, concediéndole un retroactivo entre el 1º de septiembre de 2003 y el 1º de abril de 2005, día anterior a su deceso, prestación que tan solo fue pagada por COLPENSIONES a través de Resolución GNR 167821 del 9 de junio de 2016 como pago a herederos, siendo ella la cesionaria de todos los derechos hereditarios de su padre, por cesión de derechos que hicieron a su favor sus hermanos.
- ✓ Que a través de Resolución GNR 449095 del 30 de diciembre de 2014 COLPENSIONES le reconoció la pensión de sobrevivientes en un 50% del retroactivo generado entre el 1º de abril de 2005 y el 30 de mayo de 2010, aduciendo que después de esta fecha no acreditó la calidad de beneficiaria, dado que la certificación emitida por la UNIVERSIDAD EAFIT no se especificaba la intensidad horaria mínima requerida. Además en esta resolución se dejó en suspenso el otro 50% en virtud de la reclamación que hicieran las señoras TERISTA BOCANUMENTH y su madre LUZ STELLA PRISCO RODRIGUEZ, quien no tiene derecho por haber realizado cesación de efectos civiles del matrimonio.
- ✓ Que a la fecha de radicación de la demanda estudia en la UNIVERSIDAD EAFIT, donde cursa el programa de DERECHO, encontrándose en la etapa final de su carrera, conforme certificado que se allegó a la entidad, donde se especifica que en la institución se tiene un sistema de créditos que incluye gran cantidad de horas de acompañamiento y horas no presenciales que a la luz del párrafo 1º del artículo 2 de la Ley 1574 de 2012, son horas válidas para la contabilización del mínimo de 20 horas semanas exigido, según se lee:

"...Esta matriculada como alumna regular de esta institución, en el programa de derecho, en el semestre 2016-2, esta matriculada y cursando el noveno semestre académico, con una intensidad semanal de 15 horas presenciales, sin contar las horas de trabajo independiente que demanda cada uno de los cursos."

Según el reglamento académico de los programas de pregrado - Régimen académico, capítulo 2, artículo 32. Créditos académicos: El tiempo estimado de actividad académica del estudiante en función de las competencias académicas que el programa pretende desarrollar - se expresará en unidades denominadas créditos.

Un crédito académico equivale a 48 de trabajo académico del estudiante, que comprende las horas con acompañamiento directo del docente y demás horas que el estudiante debe emplear en actividades independientes de estudio, practicas u otras que sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje, sin incluir las destinadas a la presentación de las pruebas de evaluación..."

- ✓ Que conforme a lo anterior, si bien la Universidad Certifica en algunos semestres del 2010-1 al 2016-2 menos de 20 horas semanales, se deben sumar los créditos que se aducen para cada semestre, teniendo en cuenta que cada crédito equivale a 48 horas semestrales, que el semestre se cuenta por 16 semanas, en todos los semestres referidos se acredita más del mínimo exigido, así:

Semestre 2010-1, la universidad certifica 18 horas semanales presenciales en el aula, a las que se le debe sumar 18 créditos, teniendo cada crédito 48 horas semestrales, el semestre se cuenta por 16 semanas, multiplicamos 48 horas por 18 que es la totalidad de los créditos, equivale a 864 horas semestrales más que deben dividirse por 16 semanas para un total de 54 horas semanales más que sumadas a las 18 horas nos arroja un resultado de 72 horas semanales.	Semestre 2010-2 la universidad certifica 25 horas semanales presenciales en el aula, a las que se le debe sumar 14 créditos, teniendo cada crédito 48 horas semestrales, el semestre se cuenta por 16 semanas, multiplicamos 48 horas por 18 que es la totalidad de los créditos, equivale a 672 horas semestrales más que deben dividirse por 16 semanas para un total de 42 horas semanales más que sumadas a las 25 horas nos arroja un resultado de 67 horas semanales.
Semestre 2011-1 la universidad certifica 10 horas semanales presenciales en el aula, a las que se le debe sumar 9 créditos, teniendo cada crédito 48 horas semestrales, el semestre se cuenta por 16 semanas, multiplicamos 48 horas por 9 que es la totalidad de los créditos, equivale a 432 horas semestrales más que deben dividirse por 16 semanas, para un total de 27 horas semanales más que sumadas a las 10 horas nos arroja un resultado de 37 horas semanales.	Semestre 2011-2 la universidad certifica 14 horas semanales presenciales en el aula, a las que se le debe sumar 14 créditos, teniendo cada crédito 48 horas semestrales, el semestre se cuenta por 16 semanas, multiplicamos 48 horas por 14 que es la totalidad de los créditos, equivale a 672 horas semestrales más que deben dividirse por 16 semanas, para un total de 42 horas semanales más que sumadas a las 14 horas nos arroja un resultado de 56 horas semanales.
Semestre 2012-1 la universidad certifica 13 horas semanales presenciales en el aula, a las que se le debe sumar 13 créditos, teniendo cada crédito 48 horas semestrales, el semestre se cuenta por 16 semanas, multiplicamos 48 horas por 14 que es la totalidad de los créditos, equivale a 624 horas semestrales más que deben dividirse por 16 semanas, para un total de 39 horas semanales más que sumadas a las 13 horas nos arroja un resultado de 51 horas semanales.	Semestre 2012-2 la universidad certifica 14 horas semanales presenciales en el aula, a las que se le debe sumar 14 créditos, teniendo cada crédito 48 horas semestrales, el semestre se cuenta por 16 semanas, multiplicamos 48 horas por 14 que es la totalidad de los créditos, equivale a 672 horas semestrales más que deben dividirse por 16 semanas, para un total de 42 horas semanales más que sumadas a las 14 horas nos arroja un resultado de 56 horas semanales.
Semestre 2013-1 la universidad certifica 19 horas semanales presenciales en el aula, a las que se le debe sumar 19 créditos, teniendo cada crédito 48 horas semestrales, el semestre se cuenta por 16 semanas, multiplicamos 48 horas por 19 que es la totalidad de los créditos, equivale a 912 horas semestrales más que deben dividirse por 16 semanas, para un total de 57 horas semanales más que sumadas a las 19 horas nos arroja un resultado de 76 horas semanales.	Semestre 2013-2 la universidad certifica 22 horas semanales presenciales en el aula, a las que se le debe sumar 19 créditos, teniendo cada crédito 48 horas semestrales, el semestre se cuenta por 16 semanas, multiplicamos 48 horas por 19 que es la totalidad de los créditos, equivale a 912 horas semestrales más que deben dividirse por 16 semanas, para un total de 57 horas semanales más que sumadas a las 22 horas nos arroja un resultado de 78 horas semanales.

Semestre 2014-1 la universidad certifica 14 horas semanales presenciales en el aula, a las que se le debe sumar 14 créditos, teniendo cada crédito 48 horas semestrales, el semestre se cuenta por 16 semanas, multiplicamos 48 horas por 14 que es la totalidad de los créditos, equivale a 672 horas semestrales más que deben dividirse por 16 semanas, para un total de 42 horas semanales más que sumadas a las 14 horas nos arroja un resultado de 56 horas semanales.	Semestre 2015-1 la universidad certifica 7 horas semanales presenciales en el aula, a las que se le debe sumar 5 créditos, teniendo cada crédito 48 horas semestrales, el semestre se cuenta por 16 semanas, multiplicamos 48 horas por 5 que es la totalidad de los créditos, equivale a 240 horas semestrales más que deben dividirse por 16 semanas, para un total de 15 horas semanales más que sumadas a las 7 horas nos arroja un resultado de 22 horas semanales.
Semestre 2015-2 la universidad certifica 1 horas semanales presenciales en el aula, a las que se le debe sumar 18 créditos, teniendo cada crédito 48 horas semestrales, el semestre se cuenta por 16 semanas, multiplicamos 48 horas por 18 que es la totalidad de los créditos, equivale a 864 horas semestrales más que deben dividirse por 16 semanas, para un total de 54 horas semanales más que sumadas a las 1 hora nos arroja un resultado de 55 horas semanales.	Semestre 2016-1 la universidad certifica 6 horas semanales presenciales en el aula, a las que se le debe sumar 6 créditos, teniendo cada crédito 48 horas semestrales, el semestre se cuenta por 16 semanas, multiplicamos 48 horas por 6 que es la totalidad de los créditos, equivale a 288 horas semestrales más que deben dividirse por 16 semanas, para un total de 18 horas semanales más que sumadas a las 6 hora nos arroja un resultado de 24 horas semanales.
Semestre 2016-2 la universidad certifica 15 horas semanales presenciales en el aula, a las que se le debe sumar 6 créditos, teniendo cada crédito 48 horas semestrales, el semestre se cuenta por 16 semanas, multiplicamos 48 horas por 6 que es la totalidad de los créditos, equivale a 288 horas semestrales más que deben dividirse por 16 semanas, para un total de 18 horas semanales más que sumadas a las 6 hora nos arroja un resultado de 24 horas semanales.	

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

COLPENSIONES dio respuesta a la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, con el argumento que la demandante no acreditó ante la entidad los requisitos exigidos en la Ley 1574 de 2012 en relación a la intensidad horaria semanal, para acceder a la pensión de sobrevivientes en calidad de hija estudiante mayor de 18 años. En cuanto a los hechos aceptó que la actora es hija del causante, aclaró que la fecha de deceso de este fue el 1º de abril de 2005. Así mismo aceptó el contenido de las diferentes resoluciones expedidas por la entidad donde se reconoció el pago a herederos y la pensión de sobrevivientes a la actora en un 50% hasta la fecha que acreditó estudios. Respecto a los restantes hechos afirmó que no le constan o se trata de apreciaciones de la parte actora que deberán acreditarse.

Por auto del 30 de septiembre de 2016 (fl 70) la a quo ordenó vincular como intervinientes a las señoras LUZ STELLA PRISCO RODRÍGUEZ y TERESITA DEL NIÑO JESÚS BOCANUMENTH PUERTA, dado que a través de Resolución GNR 449095 de 2014, COLPENSIONES dejó en suspenso el 50% de la pensión pretendida al haberse solicitado la misma por las anteriores.

Mediante memorial del 14 de febrero de 2017 (fl 127) la señora LUZ STELLA PRISCO RODRÍGUEZ manifestó su intención de no intervenir en el proceso.

Por auto del 25 de febrero de 2019 (fl 165) se nombró curador para representar los intereses de TERESITA DEL NIÑO JESÚS BOCANUMENTH PUERTA ya que no se había logrado su notificación. El curador presentó demanda en nombre de la anterior solicitando se reconociera la

pensión de sobrevivientes en su favor, en calidad de compañera permanente, aduciendo que fue esta quien convivió con el causante hasta su deceso y que la señora LUZ STELLA PRISCO no tenía derecho dado que se realizó divorcio y disolución de la sociedad conyugal mediante sentencia del 9 de febrero de 2000 en el Juzgado Primero de Familia de Medellín. E indicando frente a los hechos de la demanda que solo aceptaba la calidad de hija de la demandante, pero que los demás serían objeto de debate probatorio.

1.4. DECISIÓN PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia proferida el 20 de octubre de 2020 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ que la demandante ADRIANA MARÍA ARIAS PRISCO era la única beneficiaria de la sustitución pensional con ocasión del fallecimiento de su padre MIGUEL ÁNGEL ARIAS HURTADO, entre el 2 de abril de 2005 y el 31 de abril de 2014, y entre el 1 de julio de 2015 y el 8 de noviembre de 2015, dado que entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2015 no se acreditó la calidad de estudiante Así mismo DECLARÓ probada la prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 1º de abril de 2011. En consecuencia, **CONDENÓ a COLPENSIONES** a reconocer y pagar **ADRIANA MARÍA ARIAS PRISCO:**

- La suma de \$34.740.327 por concepto de retroactivo pensional causado entre el 1 de abril de 2011 al 31 de diciembre de 2014, y el 1 de julio de 2015 al 8 de diciembre de 2015.
- Los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 desde el 2 de junio de 2014 hasta la fecha de pago.
- Y las costas del proceso, fijando como agencias en derecho la suma de \$3.309.650

De otro lado ABSOLVIÓ de las pretensiones presentadas por TERESITA DEL NIÑO JESÚS BOCANUMENTH PUERTA y declaró que ni ésta ni la señora LUZ STELLA PRISCO RODRÍGUEZ, acreditan los requisitos para ser beneficiarias de la sustitución pensional.

Dentro del término concedido por la ley, la parte actora interpuso y sustentó el recurso de apelación.

2. ARGUMENTOS

2.1. DE LA JUEZ PARA DECIDIR

Estimó la a quo que toda vez que el causante había fallecido el 1 de abril de 2005 la norma aplicable eran los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 con la modificación de la Ley 797 de 2003 y que en el caso de autos como el señor MIGUEL ANGEL ARIAS para la fecha de su deceso tenía la calidad de pensionado por vejez conforme sentencia del Juzgado 10 Laboral del Circuito, para beneficiarse de la pensión de sobrevivientes la señora TERESITA DEL NIÑO BACANUMETH debía acreditar la calidad de compañera y que convivió con el pensionado hasta su deceso y durante los 5 años anteriores a la muerte, requisitos que no acreditaron en el proceso, pues conforme los documentos allegados en la investigación administrativa donde obra declaración de convivencia de la señora BOCANUMETH por un lapso de 2 años y 6 meses y según lo indicaron los testigos, esta solo convivió año y medio, por lo que ABSOLVIÓ a COLPENSIONES de las pretensiones interpuestas por esta, así mismo DECLARÓ que la señora LUZ STELLA PRISCO RODRÍGUEZ tampoco cumplió los requisitos para beneficiarse de la prestación.

De otro lado, adujo la a quo que la norma en mención también establece como beneficiarios de la prestación a los hijos mayores de 18 años y hasta los 25, incapacitados para laborar en razón de sus estudios y según el Decreto 1889 de 1994 en el artículo 15 se estableció que para acreditar la calidad de hijo estudiante debía aportarse certificado de establecimiento de educación aprobado por el Ministerio de Educación con una intensidad de 20 horas semanales, lo cual fue declarado nulo por el Consejo de Estado en sentencia del 11 de octubre de 2007 y posteriormente dicho requisito se introdujo nuevamente con la Ley 1574 del 2 de agosto de 2012 precisando que en los programas diseñados sobre el sistema de créditos se tendrán en cuenta las horas de acompañamiento directo del docente y las horas no presenciales, donde el estudiante va a realizar las prácticas o actividades necesarias para cumplir las metas académicas, siempre y cuando estas hagan parte del plan de estudios y estén debidamente certificadas por la institución educativa.

Adujo que en el caso de autos, COLPENSIONES no podía exigir el requisito de intensidad horaria con anterioridad a la vigencia de la Ley 1574 de 2012, dado que entre el 11 de octubre de 2007, cuando el Consejo declaró la nulidad de la norma que lo exigía y el 2 de agosto de 2012, cuando se expidió la mencionada norma, no existía ninguna norma que condicionara la calidad de estudiante a dicha intensidad horaria. Por lo que estimó que la demandante ADRIANA MARIA ARIAS si era beneficiaria de la prestación entre el 31 de mayo de 2010 y el 1º de agosto de 2012 y también para los periodos subsiguientes, pues conforme los certificados de estudios expedidos por la UNIVERSIDAD EAFIT se encuentra acreditada la intensidad horaria exigida, dado que según el campo de observaciones del certificado a folio 18, consagra que según el Reglamento académico, el tiempo estimado de actividad académica del estudiante se expresará en unidades denominadas créditos académicos, aclarando que un crédito académico equivale a 48 horas de trabajo académico del estudiante, que comprende las horas con acompañamiento directo del docente y más

horas que el estudiante debe emplear en actividades independientes de estudio, prácticas u otras que sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje, sin incluir las destinadas a la presentación de las pruebas de evaluación. Agregó que si bien en dicho certificado no se especifica a cuantas horas semanales equivale un crédito, en el mismo certificado al hacer la comparación entre intensidad semestral versus intensidad semanal, se puede entender que lo que se hace es dividir las 48 horas que equivalen a un crédito semestral, entre 16 que son las semanas del semestre, por lo que cada crédito equivale a 3 horas semanales. Por tanto concluyó que para el periodo 2012-2 se certifican 13 créditos que equivalen a 39 horas semanales, en 2013-1 se certifican 14 créditos que equivalen a 42 horas semanas, en 2013-2 se certifican 19 créditos que equivalen a 57 horas semanas, en 2014-1 se certifican 19 créditos que equivalen a 57 horas semanales, en 2014-2 se certifica 14 créditos para 42 semanales, para 2015-1 se certifican 5 créditos que equivalen a 15 horas semanas y para el periodo 2015-2 se certifican 18 créditos que equivalen a 54 horas semanales, por lo que concluyó que la demandante cumplió la intensidad horaria requerida en todos los periodos, excepto en el primer semestre de 2015 y que a partir del 9 de diciembre de 2015, la actora perdió la calidad de beneficiaria por haber arribado a los 25 años de edad.

Por tanto concluyó que al no haberse acreditado la calidad de beneficiarias de las demás solicitantes, la demandante ADRIANA MARIA ARIAS tenía derecho a que se le reconociera la pensión de sobrevivientes en un 100% a partir del 1º de abril de 2005, sin embargo declaró que había operado la prescripción sobre el acrecimiento entre el 2 de abril de 2005 y el 30 de mayo de 2010 y por el 100% de las mesadas entre el 31 de mayo 2010 y el 31 de mayo 2011, por lo que condenó a COLPENSIONES a pagar las mesadas causadas entre el 1º de abril de 2011 y el 31 de agosto 2014 y el primero de julio de 2015 al 8 de noviembre de 2015.

De otro lado, en cuanto a los intereses moratorios, estimó que los mismos eran procedentes pues la negativa de la entidad al reconocer las mesadas a la actora no estuvo justificada, por lo que condenó al pago de los mismos a partir del 2 de junio de 2014 y hasta la fecha de pago efectivo.

2.2. RECURSO DE APELACIÓN DEMANDANTE

Señaló que no está de acuerdo con la declaratoria de prescripción, toda vez que a folios 33/42 reposa Resolución GNR 449095 del 30 de diciembre de 2014 donde se agotó el trámite administrativo ante Colpensiones, donde se dio cumplimiento al fallo judicial proferido por el Juzgado 10 Laboral del Circuito de Medellín donde se reconoció la pensión de vejez post mortem a favor de sus herederos y se reconoció la pensión de sobrevivientes a favor de ADRIANA MARIA ARIAS PRISCO concediendo el 50% de las mesadas causadas entre 2005 y el 30 de mayo de 2010 y se

dejó en suspenso el otro 50% por la reclamación presentada por TERESITA DE JESUS BOCANUMETH y LUZ STELLA PRISCO, es decir, que solo hasta el 30 de diciembre de 2014 fue que se resolvió de fondo la reclamación administrativa, además a folios 51/67, donde consta que el fallo se emitió en febrero 26 de 2008, por tanto no puede operar la prescripción por esas mesadas, dado que están contenidas en una sentencia ejecutoriada, cuya prescripción de esa sentencia operaría en el mejor de los casos 10 años después. Insistió que como el trámite administrativo no fue agotado hasta junio de 2014 al haberse interpuesto la demanda en 2016 no transcurrieron los 3 años, por lo que no operó la prescripción.

2.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Únicamente presentó alegatos COLPENSIONES señalando que debe revocarse la sentencia de primera instancia toda vez que conforme a la certificación aportada la accionante adelantó estudios en el programa de Derecho para los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, con una intensidad horaria de 15 horas semanales, por lo que no acreditó las 20 horas exigidas en la Ley 1574 de 2012. Adicionalmente indicó que debe tenerse en cuenta que se presentaron a reclamar la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento del causante las señoras LUZ STELLA PRISCO RODRÍGUEZ, en calidad de cónyuge y la señora TERESITA BOCANUMENTH, en calidad de compañera permanente, por lo tanto ante la existencia de otros posibles beneficiarios de la pensión de sobrevivientes es la jurisdicción ordinaria la que debe resolver a quien le asiste el derecho pretendido pues no le es posible jurídicamente a COLPENSIONES, reconocer una prestación ante la existencia de otros posibles beneficiarios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990.

3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA

Conforme a los argumentos esbozados en el recurso de apelación se circunscribe a determinar si le asistió razón a la a quo en declarar la prescripción frente a los acrecimientos y las mesadas causadas con anterioridad al 1º de abril de 2011 o si por el contrario dicho fenómeno no operó como lo indica la parte actora.

Así mismo también se examinará examina en grado jurisdiccional de consulta aquellos aspectos que pese a ser adversos Colpensiones, no fueron objeto del recurso de alzada, al ser el Estado garante dicha entidad conforme lo normado en el art. 69 del CPT y la SS, por lo que en primer lugar se analizará si la demandante ADRIANA MARIA ARIAS PRISCO, en calidad de hija estudiante del

causante, tiene derecho a acceder a la pensión de sobrevivientes. En caso afirmativo se examinarán la viabilidad de los intereses moratorios concedidos.

Así mismo se analizará si fue acertada la decisión de la quo de proferir una sentencia ABSOLUTORIA respecto de las señoras LUZ STELLA PRISCO RODRÍGUEZ, en calidad de cónyuge y la señora TERESITA BOCANUMENTH, quienes fueron vinculadas como interviniente ad excludendum.

4. CONSIDERACIONES

En primer lugar, que no existe discusión que el señor MIGUEL ÁNGEL ARIAS HURTADO falleció el 1º de abril de 2005 y que a este le fue reconocida pensión de vejez post mortem a través de sentencia proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín el 27 de febrero de 2008 (fl 75/90 del expediente digital).

Por tanto, para determinar quiénes son los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes debe acudir a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que dispone:

“Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o *la compañera o compañero permanente* o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o *la compañera o compañero permanente* supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;

b) En forma temporal, el *cónyuge o la compañera permanente* supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).

Si respecto de un pensionado hubiese un *compañero o compañera permanente*, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente;”

(...) c) <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes ~~y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno;~~ y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de

invalidéz. Para determinar cuándo hay *invalidéz* se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;"

Así pues, la norma en comento determina quiénes son los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, enunciando en primer orden al cónyuge o compañero permanente con quien eventualmente concurriría el derecho con los hijos del causante.

En el caso de autos, conforme se observa en la Resolución GNR 449095 de 2014 visible a folios 45/55, COLPENSIONES le concedió a ADRIANA MARIA ARIAS PRISCO en calidad de hija en un 50% desde el 2 de abril de 2005 y hasta el 30 de mayo de 2010, toda vez que para tal fecha tenía más de 18 años y no se acreditó su calidad de estudiante y se dejó en suspenso el otro 50% dado que presentaron solicitud las señoras LUZ STELLA PRISCO en calidad de conyuge y TERESITA DEL NIÑO JESÚS BOCANUMETH como compañera permanente.

Es por lo anterior que ADRIANA MARIA ARIAS PRISCO interpuso la presente acción solicitando le fuera reconocido el 50% de las mesadas que fueron dejadas en suspenso desde el 1º de abril de 2005 y el 30 de mayo de 2010, dado que quienes se presentaron a reclamar como conyuge y compañera no tenían derecho, además de que nunca insistieron en su solicitud ni ante la entidad ni por vía judicial y además solicitó que a partir del 1º de junio de 2010 se le continuara reconociendo la prestación en un 100% toda vez que acreditaba la calidad de estudiante hasta que cumpliera los 25 años de edad.

En el presente proceso fueron citadas al proceso como intervinientes las señoras LUZ STELLA PRISCO en calidad de cónyuge y TERESITA DEL NIÑO JESÚS BOCANUMETH como compañera permanente a través de auto del 30 de septiembre de 2016 (fl 70) para que si a bien tuvieran presentaran demanda para disputar el derecho pretendido. Mediante memorial presentado el 14 de abril de 2017 la señora LUZ STELLA PRISCO manifestó que no tenía interés en intervenir en el proceso toda vez que se había divorciado del causante desde el año 2000 y frente a la señora TERESITA DEL NIÑO JESÚS BOCANUMETH se le nombró curador ad litem a través de auto del 25 de febrero de 2019 (fl 165) que presentó demanda a su nombre, por lo que se observa que si bien inicialmente fueron citadas como intervinientes, finalmente a la señora TERESITA BOCANUMETH se trató como si tratara de una Litis consorte necesaria y frente a ambas se profirió sentencia absolutoria en su contra que hace tránsito a cosa juzgada, lo que conlleva una irregularidad procesal.

El artículo 63 del C.G. del P. reguló la intervención excluyente o intervención ad excludendum indicando que:

“Quien en proceso declarativo pretenda, en todo o en parte, la cosa o el derecho controvertido, podrá intervenir formulando demanda frente a demandante y demandado, hasta la audiencia inicial, para que en el mismo proceso se le reconozca”. (subrayas fuera de texto).

De la lectura de la norma se colige que la intervención excluyente es una figura de carácter facultativo, ya que este tercero que tiene intereses en el derecho pretendido tiene la posibilidad de acudir o no al proceso presentando una demanda para disputar el derecho en litigio o bien puede abstenerse de intervenir y presentarse a un nuevo proceso.

De otro lado, el artículo 29 del C.P.T. y la S.S. dispone que en materia laboral hay lugar a emplazamiento y nombramiento de curador ad litem, cuando el demandante manifieste bajo juramento que ignora el domicilio del demandado, para que lo represente, ya que la comparecencia de éste al proceso sí es obligatoria.

Así mismo, para la Sala es claro que tal y como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 24 de junio de 1999, radicación 11862 reiterada en casación del 21 de febrero de 2006 radicación 24954, los pretendidos beneficiarios de una pensión de sobrevivientes no son Litis consortes necesarios en un proceso sino que son contrapartes por lo que deben acudir al proceso unos como demandantes y otros como *intervinientes "ad excludendum*, pues estos habrán de formular su pretensión frente a demandante y demandado, de conformidad con el artículo 53 del C.P.C., y si no se llaman en esta calidad, o no comparecen al proceso, esta omisión no genera ningún tipo de nulidad, puesto que el otro beneficiario tiene la facultad de acudir a un nuevo proceso para demandar la pensión de sobrevivientes trabando la Litis contra la Administradora de Fondo de Pensiones y contra el otro beneficiario en caso de que ya le haya sido otorgada la prestación.

Por consiguiente, es claro que este proceder, al habérsele designado un curador ad litem a la señora TERESITA DEL NIÑO JESÚS BOCANUMETH, quien presentó demanda a su nombre, implicó no solo su intervención forzosa en el proceso, sino una indebida representación, quien debió comparecer presentando una demanda a través de apoderado judicial designado por ella, con el fin de que defendiera sus intereses y entrar a disputar la pensión de sobrevivientes aportando las pruebas que, en calidad de compañera permanente, tuvieran a su favor para demostrar su calidad de beneficiaria. Sin embargo, al haber estado representada por un curador ad litem, se le privó de la oportunidad de poder disputar el derecho en igualdad de condiciones que la demandante, lo que conllevó una sentencia ABSOLUTORIA en su contra, en un proceso del que probablemente ni siquiera tuvo conocimiento, ya que no se logró su notificación; del mismo modo la señora LUZ STELLA PRISCO, quien expresamente manifestó que no deseaba intervenir en el proceso, finalmente se DECLARÓ que no acreditaba el derecho, sentencia que como se dijo hace tránsito a

cosa juzgada, cercenándoles la posibilidad de que en un futuro puedan presentar demanda en busca de la aludida pensión de sobrevivientes.

En consecuencia, esta Sala REVOCARÁ la decisión ABSOLUTORIA que se produjo en contra de las señoras TERESITA DEL NIÑO JESÚS BOCANUMETH y LUZ STELLA PRISCO RODRÍGUEZ y se abstendrá de emitir pronunciamiento de fondo frente a ellas, pues no estaban obligadas a comparecer al proceso.

Ahora, si bien es cierto que frente a las anteriores no puede emitirse ningún pronunciamiento acerca de la procedencia o no de su derecho, también lo es que el hecho que estas hayan en algún momento presentado ante COLPENSIONES solicitud de la prestación no faculta a la entidad para dejar en suspenso el reconocimiento del 50% de la prestación indefinidamente, pues si bien la ley dispone que cuando hay controversia entre pretendidos beneficiarios, la entidad de seguridad social deberá dejar en suspenso la prestación hasta que la justicia ordinaria decida a quien corresponde el derecho, tampoco faculta al fondo de pensiones para dejar este porcentaje indebidamente sin reconocer a nadie, más aún cuando de las solicitudes presentadas en vía administrativa se pueda evidenciar que estas no reúnen los requisitos y exista otro beneficiario en disputa del derecho.

En el presente caso, conforme el expediente administrativo allegado por COLPENSIONES se evidencia que cuando la señora LUZ STELLA PRISCO solicitó la prestación ante la entidad, allegó registro civil de nacimiento con nota marginal donde constaba el matrimonio y posteriori divorcio del señor MIGUEL ANGEL ARIAS, ocurrido el 9 de febrero de 2000 por lo que no tenía la calidad de cónyuge respecto del causante y en el mismo sentido la señora TERESITA DEL NIÑO JESÚS BOCANUMETH en declaración presentada ante la entidad adujo que convivió con el causante dos años y meses, es decir, un tiempo inferior al requerido por la ley, lo que significa que ninguna de las dos acreditó ante la entidad cumplir con los requisitos mínimos para ser beneficiarias de la prestación y por tanto en este caso ni siquiera se presentaba un real conflicto entre pretendidas beneficiarias, por lo que bien pudo la entidad haber negado el derecho sin necesidad de dejar en suspenso el 50%. Aunado a lo anterior, no existe constancia dentro del plenario que después de la negativa en vía administrativa que se dio a la señora LUZ STELLA PRISCO a través de Resolución No. 02744 de 2006 y 017168 de 2011 y a TERESITA DEL NIÑO JESÚS BOCANUMETH por medio de la Resolución No. 13048 de 2006, estas hayan interpuesto los recursos de ley o hayan acudido a la vía administrativa buscando el reconocimiento de la prestación, por lo que no es de recibo el argumento de la entidad de que se deba continuar dejando en reserva indefinidamente ese 50%, dado que con lo aportado en vía administrativa nisiquiera se acreditó la calidad de beneficiarias por ninguna de las solicitantes.

Por tanto estima la Sala que fue acertada la decisión de la a quo de declarar que a la demandante ADRIANA MARIA ARIAS PRISCO le asistía derecho al 100% de la mesada pensional desde el 1º de abril de 2005, fecha de deceso de su padre, dado que en la Resolución GNR 449095 DE 2014 se reconoció solo un 50% hasta el 30 de mayo de 2010, teniendo derecho al acrecimiento entre estas fechas, sin perjuicio de la prescripción.

De otro lado, COLPENSIONES le suspendió el pago de la mesada a partir del 1º de junio de 2010 aduciendo que no acreditaba la calidad de estudiante, porque el certificado allegado no cumplía con las 20 horas semanales. Empero, como lo analizó la a quo, para tal fecha, tal exigencia que estaba consagrada en el artículo 15 del Decreto Reglamentario 1889 de 1994 exigencia había sido declarada nula por el la Sección Segunda del Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo-, mediante providencia del 11 de octubre de 2007, habida cuenta que la voluntad del legislador, al expedir la Ley 100 de 1993, no fue otra que la de definir como beneficiario de ésta pensión al hijo que estuviere incapacitado para trabajar por razón de sus estudios, sin imponer restricción legal alguna en cuanto a la modalidad educativa adoptada por aquél, y que además con ello se restringía excesivamente el derecho a la educación y las libertades de escoger profesión y oficio y desarrollo de la personalidad, así como el derecho a la igualdad de oportunidades educativas. En dicha oportunidad también puntualizó que *“el Ejecutivo, con el acto acusado, no sólo asumió una competencia que no le fue Constitucionalmente atribuida, sino que además extralimitó el ejercicio de la potestad reglamentaria al restringir el alcance de la ley que reglamentó, cuando exigió que el beneficiario de la pensión de sobreviviente cursara específicamente un nivel de educación formal básica, media o superior, con una intensidad de por lo menos 20 horas semanales.”*

Exigencia que solo fue nuevamente reglamentada a través de la Ley 1574 de 2012 que entró en vigencia el 2 de agosto de 2012 estableciendo que la condición de estudiante, para efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, se acredita con certificado del establecimiento educativo autorizado por el Ministerio de Educación y con una intensidad académica no inferior a 20 horas semanas, precisando que en los programas diseñados sobre el sistema de créditos se tendrán en cuenta las horas de acompañamiento directo del docente y las horas no presenciales, donde el estudiante va a realizar las prácticas o actividades necesarias para cumplir las metas académicas, siempre y cuando estas hagan parte del plan de estudios y estén debidamente certificadas por la institución educativa.

Así las cosas, en el caso de autos, solo podía exigirse el requisito de intensidad horaria a partir del 2 de agosto de 2012, requisito que fue debidamente acreditado por la demandante, pues conforme los certificados de estudios expedidos por la UNIVERSIDAD EAFIT se encuentra acreditada la intensidad horaria exigida, dado que según el campo de observaciones del certificado a folio 18,

consagra que según el Reglamento académico, el tiempo estimado de actividad académica del estudiante se expresará en unidades denominadas créditos académicos. Un crédito académico equivale a 48 horas de trabajo académico del estudiante, que comprende las horas con acompañamiento directo del docente y más horas que el estudiante debe emplear en actividades independientes de estudio, prácticas u otras que sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje, sin incluir las destinadas a la presentación de las pruebas de evaluación.

Y tal y como lo analizó la a quo, para establecer a cuantas horas semanales equivale un crédito, es necesario dividir, 48 horas semestrales, entre 16 semanas que tiene el semestre, es decir, que cada crédito equivale a 3 horas semanales. Por tanto para el periodo 2012-2 se certifican 13 créditos que equivalen a 39 horas semanales, en 2013-1 se certifican 14 créditos que equivalen a 42 horas semanas, en 2013-2 se certifican 19 créditos que equivalen a 57 horas semanas, en 2014-1 se visualizan 19 créditos que equivalen a 57 horas semanales, en 2014-2 se certifican 14 créditos para 42 semanales, para 2015-1 se certifican 5 créditos que equivalen a 15 horas semanas y para el periodo 2015-2 se certifican 18 créditos que equivalen a 54 horas semanales, por lo que concluyó que la demadnante cumplió la intensidad horaria requerida en todos los periodos, con excepción del semestre 2015-1 que solo acredita 15 horas. Según se ve:

SEMESTRE 2012-2				
DE0123	RESPONSABILIDAD CIVIL	3	3.0	48.0
DE0126	ARGUMENTACIÓN 3: INTERPRETACIÓN Y ARGUMENTACIÓN JURIDICA	3	3.0	48.0
DE0130	DERECHO PENAL 2	3	3.0	48.0
DE0131	RELACIÓN JURIDICA PROCESAL	4	4.0	64.0
TOTALES SEMESTRE 2012-2		13	13.0	208.0
PROMEDIO CRÉDITO SEMESTRE 2012-2 (PCS)				
SEMESTRE 2013-1				
DE0123	RESPONSABILIDAD CIVIL	3	3.0	48.0
DE0130	DERECHO PENAL 2	3	3.0	48.0
EC0266	MICROECONOMIA (DERECHO Y COMUNICACIÓN SOCIAL)	2	2.0	32.0
HL0591	ANÁLISIS TEXTUAL (NÚCLEO DE FORMACIÓN INSTITUCIONAL)	3	3.0	48.0
OG0591	INICIATIVA Y CULTURA EMPRESARIAL (NÚCLEO DE FORMACIÓN INSTITUCIONAL)	3	3.0	48.0
TOTALES SEMESTRE 2013-1		14	14.0	224.0
PROMEDIO CRÉDITO SEMESTRE 2013-1 (PCS)				
SEMESTRE 2013-2				
DE0128	OBLIGACIONES	3	3.0	48.0
DE0129	DERECHO Y ECONOMÍA	3	3.0	48.0
DE0132	DERECHO ADMINISTRATIVO 1	3	3.0	48.0
DE0134	DERECHO PENAL 3	3	3.0	48.0
DE0135	DERECHO LABORAL 1	3	3.0	48.0
SEMESTRE 2014-1				
DE0136	TEORÍA GENERAL DE LOS PROCEDIMIENTOS	4	4.0	64.0
TOTALES SEMESTRE 2014-1		19	19.0	304.0
PROMEDIO CRÉDITO SEMESTRE 2014-1 (PCS)				
SEMESTRE 2014-2				
DE0138	DERECHO ADMINISTRATIVO 2	3	3.0	48.0
DE0139	DERECHO DE FAMILIA Y MENOR	3	3.0	48.0
DE0140	TÍTULOS VALORES	2	2.0	32.0
DE0141	DERECHO LABORAL 2	3	3.0	48.0
DE0142	TEORÍA GENERAL DE LA PRUEBA	3	3.0	48.0
DE0149	DERECHO PROCESAL PENAL	2	2.0	32.0
DE0152	ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO	3	3.0	48.0
DE0155	MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	3.0	48.0
TOTALES SEMESTRE 2014-2		14	14.0	224.0
PROMEDIO CRÉDITO SEMESTRE 2014-2 (PCS)				
SEMESTRE 2015-1				
DE0126	ARGUMENTACIÓN 3: INTERPRETACIÓN Y ARGUMENTACIÓN JURIDICA	3	3.0	48.0
DE0144	SUCESIONES	2	2.0	32.0
T0113	PRE-PRACTICA	0	2.0	32.0
TOTALES SEMESTRE 2015-1		5	7.0	112.0
PROMEDIO CRÉDITO SEMESTRE 2015-1 (PCS)				
SEMESTRE 2015-2				
PT0300	PERÍODO DE PRÁCTICA (DERECHO REFORMA)	18	1.0	16.0
TOTALES SEMESTRE 2015-2		18	1.0	16.0

Ahora en cuanto a la prescripción, se tiene que en el caso de ADRIANA MARIA ARIAS, el término prescriptivo estuvo suspendido hasta que cumplió los 18 años esto es, hasta el 9 de diciembre de 2008 y según se observa en el expediente administrativo, esta solicitó inicialmente la pensión de sobrevivientes en el año 2011, interrumpiendo el término prescriptivo por una sola vez, en los términos del artículo 151 del CPT y la S.S., es decir, que como la petición fue resuelta de manera

desfavorable a través de Resolución No. 17168 del 30 de junio de 2011, tenía 3 años para presentar demanda si no quería que ninguna mesada se viera afectada de prescripción, lo que en efecto no ocurrió, sino que la actora dejó pasar el tiempo, por tanto la solicitud presentada el 1º de abril de 2014 ya no tuvo la virtud de interrumpir el término prescriptivo, lo que significa que como la demanda se radicó el 29 de diciembre de 2016, se vieron afectadas de prescripción las mesadas y acrecimientos causados con anterioridad al 1º de **29 de diciembre de 2013**, por lo que se MODIFICARÁ la sentencia de primera instancia en este punto.

Por tanto se MODIFICARÁ el valor de retroactivo a reconocer el cual asciende a **\$13.365.227** teniendo en cuenta las mesadas causadas entre el 29 de diciembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2014, y el 1 de julio de 2015 al 8 de diciembre de 2015, así:

Año	# mesadas	Valor pensión	Total Retroactivo
2013	3 días	\$ 589.500	\$ 58.950
2014	14	\$ 616.000	\$ 8.624.000
2015	7 y 8 días	\$ 644.350	\$ 4.682.277
TOTAL			\$ 13.365.227

Ahora, los argumentos traídos por el apoderado de la demandante en su recurso carecen de veracidad, pues en este caso no se está pretendiendo el pago de las mesadas reconocidas en la sentencia ejecutoriada donde se concedió la pensión de vejez post mortem al causante, las cuales incluso ya fueron pagadas a la demandante como pago a herederos a través de Resolución GNR 167821 de 2016, sino que en este caso lo que prescribieron fueron las mesadas de la pensión de sobrevivientes, cuya exigibilidad comenzó a correr con la fecha del causante, aunque en el caso de la actora, el término estuvo suspendido mientras esta fue menor de edad, sin que tenga ninguna incidencia la fecha en que se profirió la sentencia que reconoció la pensión de vejez al causante en forma póstuma, pues se trata de prestaciones diferentes.

Continuando con el análisis que nos convoca, en cuanto a la viabilidad de los INTERESES MORATORIOS bastará con decir que del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, se desprende que los mismos proceden por la simple mora o retraso en el pago de la mesada, y en el caso de la pensión de sobrevivientes serían 2 meses después de radicada la solicitud, conforme lo estipula el art. 1 de la Ley 717 de 2001.

Inicialmente para su concesión se acudió a un criterio objetivo, al examinar si la prestación se otorgó o no dentro del término estipulado por la ley, sin atender a criterios de buena o mala fe de la entidad, en cuanto se trataba simplemente del resarcimiento económico. Sin embargo, tal posición se fue morigerando a partir de la sentencia con radicado 44454 del 2 de octubre de 2013, dada una nueva integración de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que dichos intereses no

eran procedentes en aquellos eventos en que las actuaciones de las administradoras de pensiones al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo dentro de los plazos estipulados, se encuentren justificadas, bien sea porque tenga respaldo normativo o porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances que en un momento dado le haya dado la jurisprudencia en su función de interpretar las normas.

En tal sentido debemos tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley 1204 de 2008 según el cual cuando se presenta controversia entre pretendidos beneficiarios de la pensión de sobrevivientes la administradora de fondo de pensiones debe dejar en reserva la prestación, si es del caso, hasta que la justicia ordinaria defina dicha controversia.

Por tanto, es claro que la negativa de la pensión de sobrevivientes por parte de la accionada, plasmada en las resoluciones expedidas, ya mencionados, que hizo acudir a la hija del causante a la jurisdicción ordinaria laboral, NO estuvo amparada en disposiciones legales, incluso la entidad tenía la potestad de resolver dicho conflicto por vía administrativa, pues según se analizó, las pruebas allegadas con las solicitudes de las señoras LUZ STELLA PRISCO y TERESITA BOCANUMETH daban cuenta que estas no acreditaban la calidad de beneficiarias de la prestación, por lo que no era necesario haber dejado en suspenso el 50% de la prestación y tampoco era de recibo el argumento que no se acreditaba la calidad de estudiante ya que con los certificados allegados estable plenamente probado tal requisito. Por lo que se encuentra acertada la decisión de la a quo de reconocer los intereses dos meses después de la solicitud, esto es a partir del 1° de junio de 2014.

En consecuencia, la sentencia de primera instancia será CONFIRMADA PARCIALMENTE con las modificaciones a que se hizo referencia.

Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante por no haber tenido éxito en el recurso, en esta instancia se fijan las agencias en derecho en la suma de \$100.000.

5. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE**

PRIMERO: CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia proferida el 20 de octubre de 2020 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral promovido la señora **ADRIANA MARIA ARIAS PRISCO** identificada con la cédula de ciudadanía Nro.


1.017.187.578 contra **COLPENSIONES, MODIFICANDO** la fecha a partir de la cual se deben reconocer las mesadas pensionales teniendo en cuenta la prescripción y el valor del retroactivo adeudado el cual asciende a **\$13.365.227** teniendo en cuenta las mesadas causadas entre el 29 de diciembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2014, y el 1 de julio de 2015 al 8 de diciembre de 2015, de acuerdo a los razonamientos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: REVOCA la decisión de primera instancia respecto a las señoras **LUZ STELLA PRISCO RODRÍGUEZ y TERESITA DEL NIÑO JESÚS BOCANUMENTH PUERTA.**


TERCERO: Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante por no haber tenido éxito en el recurso, en esta instancia se fijan las agencias en derecho en la suma de \$100.000

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.


Los Magistrados
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA



MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Demandante: **ADRIANA MARIA ARIAS PRISCO**
Demandados: **COLPENSIONES**
Intervinientes: **LUZ STELLA PRISCO RODRÍGUEZ y TERESITA DEL NIÑO JESÚS
BOCANUMENTH PUERTA**
Radicado No.: **05001-31-05-001-20116-01160-01**
Decisión: **MODIFICA SENTENCIA**
Fecha de la sentencia: **27/09/2023**

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy **28/09/2023** desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario